



[Imprimir Página Web](#)

El nuevo gobierno en Colombia

Fernando Cepeda Ulloa

ARI Nº 15-2002 - 10.7.2002

El 7 de agosto de 2002 se posesiona Álvaro Uribe Vélez, un antioqueño de 50 años, abogado, ex senador, ex gobernador de Antioquia quien, además, obtuvo un título de postgrado en la Universidad de Harvard y fue Fellow del Saint Antony´s College en la Universidad de Oxford. Uribe Vélez ganó la elección presidencial en primera vuelta, con casi el 53% de los votos. La suya fue una candidatura disidente que nunca negó su condición de liberal. Recibió el apoyo total del partido conservador y derrotó al candidato oficial del Partido Liberal, Horacio Serpa, y a la candidata independiente Noemí Sanín. También al candidato del polo democrático, Luis Eduardo Garzón. Sin proponérselo, cuenta con mayoría tanto en el Senado como en la Cámara.

Álvaro Uribe recibe un país en una crisis que se profundiza cada día más. La situación del orden público se ha deteriorado después de las elecciones del 26 de mayo. Las FARC han desafiado a la propia institucionalidad al amenazar con muerte o secuestro a varias decenas de alcaldes y de miembros de los Consejos Municipales. Dos parientes cercanos de la familia del presidente electo fueron secuestrados el 8 de julio y, por fortuna, fueron rápidamente rescatados. Se temen mayores ataques antes de su posesión.

La situación económica no ha mejorado. En 2001, el PIB creció a una tasa del 1,56% y la proyección para 2002 se ha reducido hace poco de forma oficial al 1,5%. Durante 2001, las exportaciones totalizaron US 12.290 millones, una reducción del 6.3% respecto a las del año 2000. Las importaciones crecieron el 11.4%. La inversión extranjera se redujo en US 414 millones respecto a 2001. En 1997 fueron de US 6.154, 9 millones. Los datos preelminares para 2001 apenas llegan a los US 2.000 millones. A diciembre de 2001, el saldo de la deuda externa de Colombia se situó en US 37.207 millones (44,6% del PIB) con un aumento de US 3.767 respecto al año anterior. La tasa de desempleo oscila entre el 15 y el 17%.

En la escena internacional, todavía siguen pendientes en el congreso de Estados Unidos tres decisiones de gran importancia:

- La flexibilización del Plan Colombia: la autorización legal que permita utilizar los recursos militares del plan en contra de lo que ahora se denomina "narcoterroristas".
- La aprobación definitiva de las preferencias arancelarias para la región andina (ATPA). Se espera su renovación (debía producirse antes del 4/XII/2001) pero existen bastantes dudas sobre su ampliación a nuevos productos como confecciones o textiles, entre otros.
- Está en trámite una ampliación de las contribuciones que Estados Unidos hace a Colombia en nombre del principio de corresponsabilidad en la lucha contra las drogas.

Además, es indispensable buscar una relación más constructiva con los países vecinos, particularmente con Venezuela. Respecto a la Unión Europea, es indispensable que en Bruselas se logre tener una mejor comprensión de la situación colombiana y se acuerde un compromiso más amplio.

El nuevo gobierno deberá hacer un esfuerzo descomunal con el fin de convencer a los grandes inversionistas para que traigan sus capitales a Colombia, no obstante la difícil situación de orden público. La verdad es que si no hay un fortalecimiento simultáneo de la economía y de la capacidad del gobierno para confrontar el desafío de los violentos, será muy difícil superar la grave crisis social que se expresa en un alto nivel de desempleo, un alto nivel de informalidad y un número creciente de desplazados por la violencia. Además, se ha venido produciendo una fuga de talentos y de capitales sin precedentes hasta tal punto que los envíos de dineros desde el exterior constituyen una de las principales fuentes de ingresos y, sin duda, un alivio para muchas familias agobiadas por el desempleo.

Uno de los mayores desafíos es el intento de las FARC de reunir 100 secuestrados (congresistas, diputados, gobernadores, candidatos, ex ministros, etc.) para forzar un canje entre prisioneros de las guerrillas por secuestrados. Ha sido un intento obsesivo por parte del comandante de las FARC, Manuel Marulanda, que ahora ha resuelto elevar por la categoría de los secuestrados. Además, existen cientos de miembros de la Fuerza Pública secuestrados por las FARC. Y hay más de 3.000 secuestrados en manos de diversas organizaciones. Sin duda, los ingresos que genera el secuestro, unidos a los resultantes de la extorsión y del negocio ilícito de las drogas, hacen de las guerrillas (o narcoterroristas) una fuerza con una inmensa capacidad de ocasionar daños. Tanto la infraestructura como las instituciones democráticas son objetivo militar. Lo que está en juego en Colombia es la democracia, y así debe entenderlo la Comunidad Internacional.

Uribe ha planteado una estrategia para contener la guerrilla y, al mismo tiempo, está adelantando gestiones para trabajar hacia una solución política negociada, pero dentro de un marco muy claro y estricto para no repetir los formidables errores cometidos durante la administración Pastrana. Exigirá cese de fuego y hostilidades y verificación internacional. Para ello ha adelantado conversaciones con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y a finales de junio sostuvo conversaciones discretas con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, jugando Fidel Castro un papel muy constructivo para propiciar una negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Pero tanto el desafío de una mayor confrontación con los narcoterroristas o "violentos", como prefiere designarlos el nuevo presidente, como los esfuerzos para obtener una mediación internacional de algún tipo para buscar una solución política, requerirán esfuerzos mayores por parte del nuevo gobierno y máxima cooperación internacional.

En lo referente a la estrategia de contención de los narcoterroristas se espera una mayor inversión de recursos y un mejor uso de los ya existentes, aunque algunos dudan de la posibilidad de reunir nuevos recursos financieros. Con

todo, el presidente electo ha sido contundente al señalar que hará todos los esfuerzos para redireccionar el gasto público y realizar recortes significativos en la burocracia estatal. Se esperan reducciones en el servicio exterior, la propia Presidencia de la República y en otras agencias. Para mostrar la seriedad de sus propuestas ha comenzado por dar ejemplo. Los viajes realizados al exterior los ha hecho en un mínimo de tiempo, con no más de una o dos personas como acompañantes y dentro de la mayor austeridad. Los nombramientos para integrar su gabinete incluyeron la fusión de varios ministerios, una decisión que luego tendrá que ser legalizada en una reforma más amplia de la administración pública. Al mismo tiempo se espera que Uribe adelante una estrategia implacable contra todas las formas de corrupción. Sin duda, introducirá controles más estrictos a la evasión fiscal y, probablemente, buscará penalizar este comportamiento. En el campo social espera hacer una revolución educativa e introducirá correctivos en el desordenado sector de la salud. La Administración de Justicia es ya objeto de anuncios de profundas y controvertidas reformas. Se suprimirá el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y se introducirán reformas a las Altas Cortes.

Quedan pocas dudas respecto a la realización de éstas y otras iniciativas y reformas. Lo que caracteriza al presidente electo Uribe Vélez es una altísima coherencia, una visión estratégica y una insuperable capacidad de trabajo y disciplina. Son virtudes que también está exigiendo a su gente.

Perfil del equipo de trabajo

Uribe ha designado ya a sus principales colaboradores sin referencia a grupos partidistas. Nombró 13 ministros (podía designar 16 pero fusionó 3 ministerios: Justicia con Interior; Salud con Trabajo y Medio Ambiente con Desarrollo) de los cuales 6 son mujeres, que se distinguen por sus ejecutorias en los destinos a su cargo. No son carteras de poca monta: Defensa, Relaciones Exteriores, Educación, Medio Ambiente, Cultura y Comunicaciones. Al mismo tiempo, otorgó a los conservadores ministerios como Hacienda o Interior y Justicia, entre otros. La gran mayoría de los ministros no forman parte del círculo de amistades del nuevo presidente. Su obsesión es obtener resultados. Con esa idea en mente (y ante la crítica situación del país) designó su gabinete con dos meses de anticipación. Tan sólo uno de ellos ha generado una encendida controversia: Fernando Londoño Hoyos, un reconocido abogado, distinguido por su capacidad de ganarle pleitos al Estado con gravísimos perjuicios económicos para el mismo. A su alrededor se ha agitado una controversia que dura ya varias semanas y de tal intensidad que muchos creen que no podrá tomar posesión de su cargo. El ministro designado Londoño ha abierto frentes de batalla por doquier, el más reciente con el poder judicial y en particular con la Corte Constitucional, que ya se vio obligada a hacer una declaración pública para contrarrestar los repetidos ataques del ministro.

El presidente Uribe está procediendo con igual celeridad y criterios similares en el nombramiento de viceministros y gerentes de institutos y otros agentes del Estado. La única excepción es el grupo más íntimo de funcionarios del palacio presidencial -tanto el secretario general como el secretario privado, un alto consejero y el alto comisionado para la paz y la convivencia- que está constituido por amigos cercanos, algunos de toda la vida.

La gran preocupación con respecto a la iniciación del Gobierno de Uribe Vélez tiene que ver con la secuencia o simultaneidad del proceso reformista. ¿Cómo conciliar la propuesta de reforma política que afecta en forma mayúscula a los congresistas con la aprobación de una legislación para fusionar ministerios y hacer la reforma administrativa del Estado? ¿Cómo armonizar los requerimientos del Fondo Monetario Internacional -FMI- y la urgente necesidad de apropiarse de recursos para el fortalecimiento de la Fuerza Pública? ¿Cómo asegurar el más estricto cumplimiento de los derechos humanos al tiempo que se fortalece la capacidad de confrontación militar y se incorpora a un millón de civiles en la defensa nacional? ¿Cómo concatenar el escalamiento de la confrontación con nuevas formas -algunas inclusive inéditas- de búsqueda de una solución política negociada: mediación internacional, cascos azules, etc?

Nadie pone en duda la capacidad intelectual, ni la voluntad política, ni la dedicación casi exagerada de Álvaro Uribe a sus tareas como gobernante. De ello ha dado claras y contundentes muestras. Esto explica la confianza del país. El propio Álvaro Uribe ha sido cuidadoso en advertir que no es bueno ilusionarse con grandes transformaciones y resultados porque lo que se requiere es una sucesión de gobiernos comprometidos con idéntica seriedad y determinación en adelantar unos cambios y unas políticas dirigidas a preservar la democracia colombiana. Todo eso supone recuperar el orden público, el control del territorio, el fortalecimiento de la economía, un mínimo de bienestar social para todos y cero corrupción. En una palabra: un Estado capaz que reemplace el Estado débil que caracteriza a Colombia.

Importancia para España

España, como la Unión Europea, tiene máximo interés en consolidar las democracias en América Latina. Colombia ha sido un caso paradigmático y por ello la preservación de su democracia tiene un hondo significado, de la misma manera que el fracaso de la misma podría conducir al debilitamiento o crisis de otras democracias latinoamericanas. Por otra parte, derrotar el terrorismo y el uso de la violencia como arma de lucha política es esencial para España. Y por ello, contribuir a que el terrorismo y la violencia como herramientas políticas no tengan éxito en Colombia es fundamental. Como lo es para Colombia que esos métodos no tengan éxito en España. Y en el ámbito económico no se puede pasar por alto que España tiene importantes inversiones en Colombia tanto en el sector de las comunicaciones como en el de servicios públicos y en el sector financiero. Su condición de Madre Patria no le permite ser ajena, ni siquiera indiferente a lo que ocurre en Colombia. Aparte de que históricamente siempre ha habido una estrecha relación amistosa entre los dos países.

Tampoco se pueden olvidar las inversiones y la presencia de importantes empresas españolas en Colombia, que podrían verse directamente afectadas por los cambios en la estabilidad del país.

El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos es una fundación privada e independiente cuya tarea es servir de foro de análisis y discusión sobre la actualidad internacional, y muy particularmente sobre las relaciones internacionales de España. El Real Instituto Elcano no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los documentos firmados por sus analistas o colaboradores y difundidos en su página web o en cualquier otra publicación.

© *Fundación Real Instituto Elcano 2011*

[Subir ▲](#)